

# PARA UN DESARROLLO ECONÓMICO DE ANCHA BASE REGIONAL\*

Javier María Iguíñiz Echeverría

Jefe del Departamento de Economía PUCP

Dadas las poderosas fuerzas geográficamente concentradoras que son propias de la competencia entre capitales en el mercado, ¿es posible lograr un desarrollo económico descentralizado que incluya a amplias regiones de la sierra y de la Amazonía? Alcanzar ese objetivo no es sencillo. En el campo de la economía, las reglas de la competencia empujan, normalmente, hacia la concentración de la actividad productiva en pocos ámbitos territoriales. Cuando a eso se le añade la concentración de gran parte de las decisiones políticas y administrativas en esas pocas regiones, la política refuerza a la economía y puede resultar aún más difícil frenar y reorientar el proceso centralizador. La concentración del poder político descansa, en buena medida, en la concentración del poder en el mercado.

Junto a una fuerte voluntad política descentralista se requiere, pues, una propuesta económica que tome en cuenta la tendencia hacia la concentración económica regional que resulta naturalmente de la competencia en el mercado, y establezca una división territorial y sectorial del trabajo que utilice esta competencia, en la mayor medida posible, para el objetivo descentralista.

Para ello, es necesario primero establecer qué fuerzas en esa competencia propician la descentralización o, por lo menos, cuáles son las menos centralistas; y segundo, aprovecharlas para crear empresas, que por lo general son pequeñas, pero capaces de generar empleo adecuado. En ese sentido, ya que hay fuertes tendencias a la concentración geográfica, la descentralización económica será, sobre todo —aunque nunca únicamente—, resultado de decisiones privadas de inversión.

El objetivo de las propuestas que presentamos es hacer más viable el éxito de esa inversión. Esto supone establecer planes regionales e incentivos, y es responsabilidad de las propias regiones, y en especial de su sector privado.

Pero como es fácil imaginar, el avance cuantitativo y cualitativo en esa generación de empleo regional depende, también, del aporte proveniente de la política nacional.

A continuación, presentamos algunas de las principales orientaciones para que las políticas públicas nacionales

aporten lo más posible a la descentralización económica. Éstas apuntan a una activa conexión entre la parte más productiva y competitiva de la economía nacional y el mundo de los pequeños productores del campo y la ciudad. Nos parece insuficiente —y peligroso— confiar en el mero «efecto de arrastre» que un crecimiento rápido de las exportaciones puede tener respecto a las actividades menos productivas y más alejadas de los mercados principales.

- 1) Una inserción internacional que favorezca el aumento de la productividad tanto en el campo como en las pequeñas y microempresas urbanas.
- 2) Una política fiscal que permita financiar la mejora de la calidad de la educación y la salud, con el fin de elevar la capacidad humana de absorber y adaptar el conocimiento del exterior y combinarlo con el del país.
- 3) Una política laboral que impulse la ampliación del mercado interno e incentive a las pequeñas empresas a invertir en nueva tecnología.

Sin embargo, el desarrollo económico regional no puede ser resultado del apoyo que se brinde desde la política nacional. El esfuerzo fundamental es local, regional. Para hacer más viables —competitivamente hablando— las iniciativas de los pequeños inversionistas en las diversas regiones, así como más eficaz la promoción de la inversión de los gobiernos regionales y locales, consideramos necesario tomar en cuenta las siguientes orientaciones:

- 1) Una política de incentivos para agregar valor in situ a la producción local, transformando los productos de la naturaleza.
- 2) Una política de incentivos a la absorción de tecnología, que permita aprovechar la gran diversidad productiva del país promoviendo el uso de medios productivos favorables a la producción de calidad en pequeña escala.
- 3) Una política educativa adecuada al medio en el que se desenvuelve, que facilite el aprovechamiento de las potencialidades regionales por parte de empre-

\* Este texto es una variante, con pequeñas modificaciones, del resumen ejecutivo del autor «Para un desarrollo económico descentralizado». En Walter Alejos (editor). *Evaluación anual y balance del proceso de descentralización*. Lima: Congreso de la República, PRODES y USAID Perú, 2005.

sarios privados locales.

- 4) Una política de mejora de las condiciones de vida en las ciudades intermedias, con la finalidad de retener en las regiones a una creciente proporción de sus mejores técnicos y profesionales.

La promoción del desarrollo económico no tiene suficiente alcance si es que todo lo anterior no se complementa con orientaciones de política focalizada para el nivel provincial y distrital de las zonas con mayor pobre-

za en el país. Para ello, nos parece necesario combinar dos criterios de acción:

- 1) La universalización de los programas de nutrición infantil; promoción, prevención y atención de la enfermedad; atención materno-infantil y educación primaria de calidad.
- 2) La focalización de los programas de apoyo a la actividad productiva de acuerdo con la vocación y potencialidad de los distintos ámbitos territoriales y con los recursos disponibles. ■

## LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES: INTEGRARSE, ¿PERO CON QUIÉN?

**Hernando Arizábal**

Asistente del Área de Ciencia Política del Departamento de Ciencia Sociales PUCP

La integración económica y territorial, entendida como la creación de un espacio para el intercambio libre de bienes y servicios con el fin de conseguir beneficios mutuos, ha constituido siempre un anhelo para distintos países del orbe. Este anhelo ha significado, particularmente para América del Sur, un proceso complejo, no exento muchas veces de marchas y contramarchas, de dificultades y frustraciones.

La complejidad antes señalada se podría aplicar a los distintos procesos que se desarrollan actualmente, como el Mercado Común del Sur (MERCOSUR); la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y, últimamente, la iniciativa de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN), además de los distintos acuerdos multilaterales y bilaterales que han firmado nuestros países desde la década de 1960, y que no viene al caso tratar en esta oportunidad.

Para efectos de este artículo, nos concentraremos en la CAN y en cuáles han sido las dificultades —desde el punto de vista político y de política internacional— que no la han permitido surgir como un bloque sólido, con capacidad y poder de negociación.

La CAN se constituye el 26 de mayo de 1969 como el Acuerdo de Cartagena, que dio origen al Grupo Andino. Esta era una iniciativa destinada a crear un espacio común de países andinos para el libre intercambio de bienes y servicios; se buscaba, así, potenciar las capaci-

dades de estos en la consecución de sus objetivos nacionales, como el crecimiento económico y el desarrollo sostenido. Originalmente, la CAN estaba constituida por el Perú, el Ecuador, Bolivia, Colombia y Chile, pero este último país se desligó en 1976, y en 1973 se incorporó Venezuela.

La CAN tuvo, en el momento de su creación, un impulso inicial que, con el tiempo, fue menguando. Así, en 1980 se encontraba, prácticamente, en la parálisis total; recién en 1997 se establecieron los lineamientos de política exterior común, mediante los cuales se está intentando reflotar a la CAN. A contracorriente de estos esfuerzos, el carácter agudo de los problemas por lo cuales está pasando la mayoría de los países andinos, así como los cambios en la agenda política de algunos —como Venezuela—, al parecer están poniendo en cuestión la viabilidad de la institución misma.

Se han hecho muchos estudios sobre la CAN, pero si bien estos constituyen una ayuda para el análisis, siempre tienen un sesgo económico. Muy pocos se han fijado en los factores políticos que intervienen en un proceso de integración como el que mencionamos.

La idea central es que es materialmente imposible consolidar un proceso de integración como el que plantea la CAN cuando sus países integrantes están pasando por serios problemas de gobernabilidad interna. Medidas como la armonización de cifras macroeconómicas,